



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: GLORIA ESMERALDA ARBOLEDA VÁSQUEZ
Demandados: ACP COLPENSIONES Y AFP PROTECCIÓN S.A.
Radicado: 05001 31 05 005 2023 00060 01
Sentencia: S-285

AUTO

En atención a la escritura pública 3368 del 2 de septiembre de 2019 allegada al expediente, en la que se otorga poder general para representar a la ACP COLPENSIONES a la sociedad CAL & NAF ABOGADOS S.A.S., se le reconoce personería como apoderada judicial a la Dra. CLAUDIA LILIANA VELA, T.P. 123.148 del C. S. de la Judicatura. Y se accede a la sustitución de poder presentada por la referida apoderada, a favor del Dr. MAURICIO LARA GARCÍA portador de la T.P. N° 273.006 del C. S. de la Judicatura, a quien se le reconoce personería judicial para actuar en los mismos términos que la apoderada principal.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en este acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a revisar **en grado jurisdiccional de Consulta a favor de**

COLPENSIONES, la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín el día 30 de mayo de 2023.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

GLORIA ESMERALDA ARBOLEDA VÁSQUEZ demandó a PROTECCIÓN S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la ineficacia de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, disponiéndose el regreso automático a COLPENSIONES. Como consecuencia, solicita se ordene a PROTECCIÓN S.A. el traslado de aportes, rendimientos, comisiones de administración, pólizas de seguros previsionales y porcentaje de garantía de pensión mínima, debiendo ser aceptados por COLPENSIONES admitiendo el regreso a éste fondo sin solución de continuidad. Pretende además se condene en costas procesales a las demandadas.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones que estuvo afiliada al ISS desde el mes de mayo de 1985 hasta octubre de 1995, contabilizando 426 semanas; que se trasladó a PROTECCIÓN S.A. en el mes de noviembre de 1995, convencida de que era su mejor opción como se lo indicó el asesor que la visitó en su lugar de trabajo, el cual le expresó que su mesada sería más alta que en el fondo público y que además éste iba a desaparecer; que no se le informó sobre las diferencias entre el RAIS y el RPM, ni cómo se podría pensión anticipadamente y mucho menos se le realizó un cuadro comparativo entre ambos regímenes; que nunca se le reasesoró antes de cumplir los 47 años de edad; que al solicitar información a PROTECCIÓN S.A. sobre su situación

pensional, se le indicó que a los 57 años obtendría una garantía de pensión mínimo, y a los 60 con la redención del bono pensional, obtendría una mesada por valor de \$1'358.483, pudiendo variar la pensión en el sentido de la rentabilidad; que intentó regresar al fondo público, pero se le indicó que ya no era procedente; y que no conocía de la restricción legal establecida para trasladarse.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, COLPENSIONES acepta la afiliación a esta entidad y las cotizaciones realizadas; que es cierta la solicitud elevada de traslado, la cual fue negada; y que no le constan los demás hechos por ser ajenos a la entidad. Se opuso a todas las pretensiones por carecer de fundamento fáctico y legal. Como excepciones propuso carga dinámica de la prueba, inoponibilidad por ser tercero de buena fe, improcedencia para decretar la ineficacia del traslado de régimen o inexistencia de la obligación, inexistencia de vicio en el consentimiento, devolución de cuotas de administración, seguros previsionales, comisiones indexadas, prescripción, imposibilidad de condena en costas y compensación.

PROTECCIÓN S.A. señaló que no le consta la afiliación al ISS; que a la demandante nunca se le manifestó que su mesada sería más alta, pues se le informó que la pensión de vejez en el RAIS depende de varios factores; que no es cierto la falta de información, toda vez que esta entidad siempre se ha caracterizado por su actuar responsable, diligente y con apego a la ley, por lo cual siempre brinda un acompañamiento constante a sus afiliados; que la pensión que se le reconocería sería acorde con los aportes realizados, ya que existe equilibrio entre la contribución realizada y lo que recibiría por concepto de pensión de vejez; y que no le constan los demás hechos, por ser una situación entre la parte demandante y otra administradora. Se opuso a las pretensiones de la demanda indicando que se está frente a un acto existente, válido y exento de vicios del consentimiento. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación y falta de causa para

pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos, inexistencia de la obligación de devolver comisión de administración y seguro previsional, y aplicación del precedente sobre los actos de relacionamiento y traslado de aportes.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 30 de mayo de 2023, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, **i) DECLARÓ** ineficaz el traslado de la demandante del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por falta de información, que conllevó a un error en el consentimiento de la demandante al momento de afiliarse a PROTECCION S.A.; **ii) DECLARÓ** que la afiliación al RPMPD de la demandante no ha tenido solución de continuidad en el tiempo en el que ha estado activamente vinculada al Sistema General de Pensiones; **iii) CONDENÓ** a PROTECCIÓN S.A. a trasladar con destino a COLPENSIONES el 100% de los aportes efectuados por la demandante y cualquier otro valor de la cuenta de ahorro de la actora, incluido frutos y rendimientos que se hubiesen causado, asumiendo con cargo a su propio patrimonio los conceptos de comisiones de administración, el valor de las pólizas previsionales, lo descontado para el fondo de garantía de pensión mínima y para el fondo de solidaridad pensional, que se hubieren deducidos desde la fecha en que se hizo efectiva la afiliación hasta la fecha que se haga el traslado de régimen, valores que deberán ser debidamente indexados; **iv) CONDENÓ** a COLPENSIONES a recibir los aportes que la AFP PROTECCIÓN S.A. le devuelva y a tener en cuenta el tiempo cotizado en el RAIS como semanas cotizadas que deberán reflejarse en su historia laboral; y **v) CONDENÓ** en costas a PROTECCION S.A., y **ABSOLVIÓ** a COLPENSIONES de las costas.

La presente decisión se conoce en grado jurisdiccional de **Consulta** a favor de COLPENSIONES, toda vez que ninguna de las partes interpuso recurso de apelación.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término legalmente concedido, COLPENSIONES expuso que éste no participó en la celebración del contrato de vinculación ni hizo uso de las maniobras contrarias a la ley para obtener el traslado de los aportes de los afiliados; que la existencia de vicios en el consentimiento deben ser probados y no simplemente referenciados, es así como en el caso en concreto no se encuentra válidamente acreditado por ningún medio por lo que la ineficacia invocada carece de viabilidad; que la parte actora es una persona plenamente capaz, pues no se acreditó lo contrario, suscribiendo el formulario de forma libre y voluntaria; que la evaluar lo concerniente la carga dinámica de la prueba la jurisprudencia invierte la carga de a prueba en cabeza del fondo privado, sin que existe un mínimo esfuerzo por parte de la demandante, violando así el debido proceso de Colpensiones quien siendo un tercero ajeno debe afrontar la carga de la futura prestación generando un desequilibrio financiero; y que si se deja en firme la sentencia de primera instancia, se debe ordenar a la AFP la devolución de todos los conceptos en razón de la afiliación, debidamente indexados.

CONSIDERACIONES:

Esta Sala procede a conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado acreditados, se encuentran los siguientes: **i)** la señora GLORIA ESMERALDA ARBOLEDA VÁSQUEZ nació el 12 de abril de 1967; **ii)** que estuvo afiliada en el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, y comenzó a realizar cotizaciones allí a partir del 17 de mayo de 1985, reuniendo un total de 421,29 semanas; **iii)** y que el 25 de octubre de 1995 realizó

solicitud de vinculación a la AFP PROTECCIÓN S.A.¹ entidad a la cual se encuentra actualmente vinculada.

Ahora bien. La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de la consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993², o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado”.*

¹ Folio 24 de la contestación de PROTECCIÓN S.A.

² Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 “*ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero*”

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 271 estableció:

*“Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. N° 31.989 de 2008:

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador

experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica."

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- (i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;
- (ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues ello no demuestra por si solo que se hubiere brindado una información idónea, y se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;
- (iii) Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y
- (iv) No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que los fondos privados hayan brindado, en el

momento del traslado, una información integral de las condiciones subjetivas de la afiliada, con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquel pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, los Fondos privados incumplieron con su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Del interrogatorio de parte absuelto por la actora, no se vislumbra confesión alguna respecto del cumplimiento a ese deber de información, manifiesta simplemente la demandante sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del traslado de régimen que, a su empresa llegó un asesor con un formulario, ya que el jefe de recursos humanos le dijo que todos se debían cambiar de régimen; que el asesor nunca le brindó una información, pues tan solo le solicitó los datos para llenar el formulario, y le indicó que el Seguro Social se iba acabar y que la plata estaría más segura en un fondo privado.

De lo anterior no se deriva -entonces- que aparezca clara la prueba de un reconocimiento de que los promotores del Fondo privado hubieren informado en detalle las diferencias jurídico-financieras de los sistemas pensionales, con expresión de sus características propias, así como las repercusiones que una decisión de semejante calado podría traerle a la afiliada al momento de hacer efectiva la prestación.

Lo dicho permite dar aplicación al citado artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *"La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador"*.

Debe advertirse que no es de recibo el argumento de la imposibilidad en el traslado de régimen con fundamento en el art. 2 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 13 de la Ley 100 del 1993, tema frente al cual la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según sentencias como la SL 655 y SL 1022 del 23 de marzo de 2022, ha considerado que es un despropósito “... centrar el análisis en los períodos definidos en la ley para hacer traslados entre regímenes, o la limitante para realizarlo cuando le falten menos de diez (10) años para alcanzar la edad requerida, puesto que lo pretendido siempre fue la nulidad y/o ineficacia del traslado efectuado a la AFP Porvenir S.A. en el año 1999”.

En consecuencia, en este puntual aspecto se **CONFIRMADA** la decisión adoptada en primera instancia.

Conceptos a trasladar

De otro lado, en cuanto a la decisión de ordenar también la devolución de las cuotas de administración, seguros previsionales y demás conceptos, basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos, que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada en las sentencias SL 5595 de 2021 y SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en

que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.

(...)

En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional."

Esta Sala igualmente advierte que la orden a PROTECCIÓN S.A. de trasladar los conceptos mencionados, es decir, las cuotas de administración, seguros previsionales y aportes destinados al fondo de garantía de pensión mínima deben incluir la respectiva indexación, tal y como fue ordenado en primera instancia, pues así lo ha entendido igualmente la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

En ese aspecto, dicha Corporación ha ordenado la indexación en sentencias como las ya citadas, pero de forma más clara en las sentencias SL 3349-2021, SL359-2021 y SL3394-2022, en las que concluyó, entre otras cosas, que uno de los efectos de la declaratoria de la ineficacia de traslado de régimen pensional, es que "... todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones,

esto es, que mantendrán su poder adquisitivo inicial, por lo que se deben indexar."

Conforme a las ordenes anteriores, no se puede pasar por alto las recientes providencias de la Corte Suprema de Justicia como lo son las sentencias SL-843-2022, SL-755-2022 y SL-756-2022, en donde se impone a las AFP privadas la obligación de que junto con las sumas objeto de traslado, se entregue información donde los conceptos trasladados aparezcan discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Así pues, para esta Sala es válido que se exija una claridad en los valores y conceptos a devolver, por lo que se deberá **ADICIONAR** las condenas proferidas a los fondos privados, para ordenarle que, al momento de efectuar el traslado de los diferentes valores a COLPENSIONES, todos los conceptos aparezcan discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

En consecuencia, la sentencia de primera instancia deberá ser **CONFIRMADA** en todas sus partes.

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, el día 30 de mayo de 2023, pero se **ADICIONA** en el sentido de **ORDENAR** a PROTECCIÓN S.A. que, al momento de

cumplirse la orden de trasladar las sumas recibidas con motivo de la afiliación de la demandante, estos conceptos deben aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese por EDICTO.

Salvamento de voto parcial.

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

RADICADO: 05001 31 05 005 2023 00060 01

FRANCISCO ARANGO TORRES, magistrado de la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, presento SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO en la sentencia del proceso de la referencia, en los siguientes términos:

Con el acostumbrado respeto, me permito salvar parcialmente mi voto en la decisión de confirmar totalmente la sentencia del *a quo*, pues si bien comparto la decisión de confirmar la declaratoria de la ineficacia del traslado del demandante del régimen pensional ahorro individual, al de prima media de COLPENSIONES, no comparto en la parte que dispuso ordenar a la AFP PROTECCIÓN S.A., que, por efecto de la ineficacia declarada, le traslade a COLPENSIONES, los aportes del demandante que haya recaudado esta AFP con destino al Fondo de Solidaridad Pensional, por las siguientes razones:

Las pensiones y otras prestaciones que se originen de la afiliación al sistema pensional, se financian con el cien por ciento (100%) de la cotización del respectivo afiliado, sin perjuicio del porcentaje que legalmente se autoriza utilizar en la administración de la afiliación.

Ahora, conforme al Artículo 20 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 7 de la ley 797 de 2003, los afiliados al sistema pensional que tengan un ingreso mensual, igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes, debe realizar un aporte adicional. Esto dispone la citada norma legal *“La entidad a la cual esté cotizando el afiliado deberá recaudar y trasladar al fondo de solidaridad pensional los recursos correspondientes en los términos y condiciones que señale el Gobierno Nacional.”*

Por su parte, el literal i) del Artículo 13, de la Ley 100 de 1993, Modificado por el artículo 2 de la ley 797 de 2003, dispone lo siguiente:

“i) Modificado por el artículo 2 de la ley 797 de 2003. El fondo de solidaridad pensional estará destinado a ampliar la cobertura mediante el subsidio a los grupos de población que, por sus características y condiciones socioeconómicas, no tienen acceso a los sistemas de seguridad social, tales como trabajadores independientes o desempleados, artistas, deportistas, madres comunitarias y discapacitados. Créase una subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, destinado a la protección de las personas en estado de indigencia o de pobreza extrema, mediante un subsidio económico, cuyo origen, monto y regulación se establece en esta ley. La edad para acceder a esta protección será en todo caso tres (3) años inferior a la que rija en el sistema general de pensiones para los afiliados.”

El aporte al referido fondo, es distinto a la cotización que debe realizar el trabajador como su aporte pensional para financiar su pensión con su cuenta individual de ahorro pensiona en el RAIS, o con el aporte al fondo común en el RPM, por lo que, en el evento que las administradoras de pensiones tanto del RPM como del RAIS, hayan recaudado el aporte para el citado Fondo, este no integra el aporte con destino a los fondos de pensiones para financiar la pensión del afiliado, y por ello, ante la declaratoria de ineficacia, el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional que posean las AFP de RAIS, no deben ser devueltos a COLPENSIONES, sino consignados en dicho fondo, a órdenes del Ministerio de la Protección Social, quien lo administra.

Y es que ninguna persona y menos la Nación, se puede ver afectada por una decisión judicial, de un proceso que se tramitó sin su conocimiento, en el que no pudo defender sus derechos, por lo que se hacía necesario, que en este caso de oficio, se revisara la legalidad de la sentencia de primera instancia, disponiendo que en el evento que PROTECCIÓN S.A., posea dineros que haya recaudado con destino al referido Fondo, lo consigne en el mismo, a órdenes del Ministerio de la Protección Social, tal como se realiza de oficio, en los casos que se ha

ordenado a las AFP devolver a COLPENSIONES, dineros provenientes del bono pensional tipo A, que no se genera ante la declaratoria de ineficacia, disponiendo que al devolución se realice al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

En los anteriores términos, dejo **salvado parcialmente** mi voto en la decisión mayoritaria de confirmar la sentencia de primera instancia, con la orden de que PROTECCIÓN S.A. le entregue a COLPENSIONES, los dineros que haya recaudado con destino al Fondo de Solidaridad Pensional.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia
Firma Con Salvamento Parcial De Voto

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **60c7019e02dc50a21129272426261c6b96efc53f8337ff76fe6ee01cfb23ec69**

Documento generado en 20/10/2023 03:51:14 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>